

MONUC 2025



**MONUC**

Modelo de Naciones Unidas de la  
Universidad Católica de Pereira

# GUÍA ACADÉMICA SENADO DE LA REPÚBLICA

DEBATIENDO EL PRESENTE, CONSTRUIMOS EL FUTURO



GUÍA ACADÉMICA  
MONUC 2025

Carta de bienvenida

---

Carta de la secretaria general 03

---

Carta de la directora académica 04

---

Carta de bienvenida de la  
Directora de presidencia 05

---

Introducción al comité 10

---

Tema 1 12

---

Tema 2 21

---

Qarmas 27

---

Bibliografía recomendada 28

---

Referencias bibliográficas 29

---

# Tabla de contenido



# Secretaria general Pamela Torres

Soy Pamela Torres, estudiante de séptimo semestre de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Pereira y me emociona profundamente poder darles la bienvenida a esta edición de MONUC 2025. Creo firmemente que este modelo es una gran oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de escuchar, argumentar con respeto y proponer cambios que trascienden. Espero que cada delegado pueda encontrar en este espacio un lugar para expresarse libremente, construir lazos de amistad y descubrir lo valioso de trabajar unidos por un bien común. Los invito a vivir MONUC 2025 con emoción, con ganas de aprender y de conocer nuevas ideas. Que cada momento aquí nos motive a seguir creyendo en el diálogo como la mejor herramienta para transformar la realidad. Bienvenidos a esta gran aventura!

Pamela Torres  
Cel:3014277079  
Email: Pamela.torres@ucp.edu.co



**MONUC**

Modelo de Naciones Unidas de la  
Universidad Católica de Pereira



# Directora Académica

## Isabella Trujillo

Es Es un honor darles la bienvenida a MONUC 2025 en la Universidad Católica de Pereira. Soy Isabella Trujillo Manrique, estudiante de Negocios Internacionales y Administración de Empresas, y este año tengo el privilegio de ser la Directora Académica.

Para mí, MONUC no es simplemente una simulación; es un espacio vivo donde el diálogo, la diplomacia y la colaboración transforman ideas en propuestas, y donde las diferencias se convierten en oportunidades para aprender. Aquí cada palabra y negociación son una oportunidad para crecer como personas y profesionales.

Lo que más me emociona es cómo este evento reúne culturas y perspectivas diversas con un mismo propósito: aportar soluciones creativas a los retos globales. Este es un lugar para escuchar, ser escuchados y descubrir que en la diversidad está nuestra mayor fortaleza.

Como Directora Académica, mi compromiso es que vivamos esta experiencia en un ambiente inclusivo, dinámico y respetuoso, donde todos puedan participar con confianza.

¡Bienvenidos a MONUC 2025! Estoy segura de que será una experiencia inolvidable.

Isabella Trujillo  
Cel: 3205503642  
Email: [Isabella.trujillo@ucp.edu.co](mailto:Isabella.trujillo@ucp.edu.co)



**MONUC**

Modelo de Naciones Unidas de la  
Universidad Católica de Pereira



# Directora de presidencia

## Mariana Vanegas

Estimados delegados, es un placer saludarlos. Soy Mariana Vanegas, su coordinadora de presidencia. Estoy muy ansiosa por conocerlos a todos, estoy completamente segura de que esta será una experiencia inolvidable tanto para ustedes como para nosotras.

Si en cualquier momento necesitan ayuda o tienen alguna inquietud no teman por preguntar ya que siempre estaré dispuesta a ayudarlos. Espero que esté MONUC 2025 les inspire a seguir creando y asistiendo a estos espacios educativos tan enriquecedores.

Espero y aspiro que cada una de las comisiones esté llena de buena comunicación, compañerismo y mucho respeto.

Y recuerden:

“La educación es, sencillamente, el alma de una sociedad pasando de generación en generación”. Gilbert K. Chesterton. (1874-1936).

Confiamos en ustedes delegados.

Atentamente,

Mariana Vanegas

Cel:3102217061

Email:kmsp1005@gmail.com



**MONUC**

Modelo de Naciones Unidas de la  
Universidad Católica de Pereira





**MONUC**

Modelo de Naciones Unidas de la  
Universidad Católica de Pereira



## PRESIDENTE DEL COMITÉ

Mi nombre es Sofía Moreno Ordoñez y actualmente curso el noveno semestre de Administración de Empresas en la Universidad Católica de Pereira. A lo largo de mi formación he descubierto que el verdadero aprendizaje no solo está en los libros, sino en las experiencias que nos retan, nos inspiran y nos transforman. He tenido el privilegio de participar en catorce Modelos de Naciones Unidas, asumiendo roles como Directora Académica, Presidenta y Delegada. Cada uno de estos espacios me ha enseñado algo único: el valor de la preparación, la importancia de escuchar antes de responder, y la fuerza que tiene una idea cuando se defiende con argumentos y respeto. Creo profundamente en el poder del trabajo en equipo y en la capacidad de las personas para construir soluciones que cambian realidades. Mi meta siempre ha sido sumar valor con creatividad, liderazgo y empatía, buscando generar un impacto que vaya más allá de lo inmediato. Más que un currículum, lo que puedo ofrecer es mi compromiso, mi pasión por aprender y mi convicción de que con esfuerzo y visión podemos hacer la diferencia.

Gracias por tomarse el tiempo de conocerme. Estaré feliz de compartir más sobre mi historia y mis sueños, y de escuchar también los suyos.





**MONUC**

Modelo de Naciones Unidas de la  
Universidad Católica de Pereira



## VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ

Mi nombre es Mariana Garzón y actualmente curso el sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Católica de Pereira. Me considero una persona apasionada por el estudio, disfruto aprender cada día y soy fiel creyente de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para crecer y transformar realidades. He tenido la oportunidad de participar en algunos Modelos de Naciones Unidas, siempre desempeñándome como delegada. Sin embargo, en esta ocasión asumiré el rol de presidenta, lo cual representa un nuevo reto para mí, pero que enfrentó con toda la actitud y el entusiasmo de seguir fortaleciendo mis habilidades de liderazgo, responsabilidad y compromiso.

Mi interés por ser parte del MONUC surge de la convicción de que este espacio representa una gran oportunidad para crecer tanto a nivel personal como profesional. Estoy segura de que me permitirá no solo aprender de los demás, sino también aportar con mi esfuerzo y dedicación. Gracias por tomarse el tiempo de leer sobre mí. Estaré encantada de compartir mi historia, mis metas y también de escuchar las suyas.

# SENADORES

## **PACTO HISTÓRICO**

- Gustavo Bolívar – Pacto Histórico
- Alexander López – Pacto Histórico
- María José Pizarro – Pacto Histórico\_
- Aida Avella – Pacto Histórico
- Roy Barreras – Pacto Histórico\_
- Martha Peralta Epieyú – MAIS / Pacto Histórico\_
- Iván Cepeda – Pacto Histórico
- Wilson Arias – Pacto Histórico\_
- Clara López – Pacto Histórico

## **PARTIDO LIBERAL**

Lidio Arturo García Turbay – Partido Liberal

Juan Pablo Gallo – Partido Liberal

Miguel Ángel Pinto – Partido Liberal

## • **PARTIDO CONSERVADOR**

Nadia Blel – Partido Conservador\_

Esperanza Andrade – Partido Conservador\_



- ***CENTRO DEMOCRÁTICO***

Paloma Valencia – Centro Democrático

María Fernanda Cabal – Centro Democrático

Paola Holguín – Centro Democrático

Alirio Barrera – Centro Democrático

Honorio Henríquez – Centro Democrático

- ***PARTIDO DE LA U***

Juan Felipe Lemos – Partido de La U

- ***CAMBIO RADICAL***

David Luna – Cambio Radical

Carlos Fernando Mota – Cambio Radical

# INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

El Senado de la República de Colombia es la cámara alta del Congreso, que junto con la Cámara de Representantes lo conforma. Es decir, representa uno de los espacios donde se toman las decisiones más relevantes en materia de leyes, control del gobierno y reformas a nivel nacional. Por el momento, está integrada por 108 senadores elegidos de forma directa por los ciudadanos cada cuatro años. De esos 108 senadores, 100 son de la circunscripción nacional, es decir, que representan a todo el país, 2 se eligen por comunidades indígenas, 5 son del partido Comunes en virtud del Acuerdo de Paz con las FARC (hasta el 2026) y una curul se ofrece de manera automática a la segunda fuerza política que queda en las elecciones presidenciales. Todo eso está escrito en la Constitución de 1991, que, entre otras, define las reglas del juego del poder político del país.

La función del Senado no es únicamente la de aprobar o rechazar las leyes, sino que también tiene una importantísima función de control político, ya que puede citar a ministros, altos funcionarios o al presidente de la República, para que respondan a preguntas o se pregunten por sus actuaciones. Igualmente, es el Senado el que debe ratificar tratados internacionales que Colombia celebre con otros países o con organizaciones multilaterales, lo que lo convierte en un escenario importante de la política exterior.

Un segundo aspecto importante es que el Senado participa en la elección de los altos funcionarios que garantizan el equilibrio de poderes, (el Procurador General de la Nación, magistrados de cortes o tribunales especiales, entre otros), pudiendo abrir por su parte juicios políticos contra el presidente de la República, magistrados o altos funcionarios que se les acuse de haber cometido delitos y faltas muy graves. Por último, más allá incluso de sus funciones formales, el Senado es el lugar donde se discuten las grandes cuestiones que afectan a la sociedad colombiana; desde la aprobación de reformas laborales o tributarias, hasta los debates sobre la forma de cumplir con los acuerdos de paz, mejoramientos de la educación, la salud, la seguridad, etc.



El papel del Senado no se limita únicamente a aprobar o rechazar leyes. También cumple una función de control político muy importante: puede citar a ministros, altos funcionarios y hasta al mismo presidente.



# TEMA

## *Tema 1 : Implicaciones de la reforma laboral en la relación entre justicia social y productividad económica.*

### **Breve introducción sobre reformas**

En Colombia, se define que una reforma es un cambio significativo en las leyes, en la Constitución o en las políticas públicas que busca mejorar, actualizar o corregir aspectos de la vida social, económica, política o institucional del país. Estas mismas se realizan con el fin de que la sociedad tenga opciones de cambio con el tiempo y surjan nuevas necesidades que requieren ajustes en las normas existentes. Encontramos diferentes tipos de reformas: las reformas constitucionales, que modifican artículos de la Constitución de 1991; las reformas legales, que ajustan o modifican leyes ya vigentes en áreas como el trabajo, la salud, los impuestos o las pensiones; y las reformas administrativas o institucionales, que buscan modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado.

El proceso para aprobar una reforma inicia generalmente con la presentación de un proyecto de ley (cuando afecta leyes ordinarias) o de un acto legislativo (cuando toca la Constitución), los cuales son debatidos en el Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Si el Congreso lo aprueba, el proyecto pasa al presidente de la República para su sanción y entra fuertemente. En otras palabras, una reforma en Colombia es una herramienta mediante la cual el país adapta sus normas y estructuras a nuevas realidades, con el propósito de responder a los retos sociales y económicos que enfrenta la población.

### **Proceso de una reforma en Colombia**

El proceso de reforma en Colombia comienza con la propuesta de ley. Esta puede ser impulsada por el gobierno nacional, los miembros del Congreso, la ciudadanía a través de mecanismos participativos o, en casos especiales, por las Cortes Supremas.



Una vez redactado el proyecto de ley, se presenta al Congreso de la República y, según las circunstancias, se le da el carácter de proyecto de ley o de acto legislativo. En el Congreso, las reformas legales deben someterse a cuatro debates, mientras que las reformas constitucionales requieren ocho debates a lo largo de dos legislaturas. Durante estos debates, los miembros del Congreso pueden aprobar, rechazar o enmendar el texto. Si el Senado y la Cámara de Representantes adoptan versiones diferentes, una comisión de conciliación unifica el texto final. Una vez finalizado el proceso legislativo, la reforma se presenta al Presidente de la República para su aprobación, lo que le otorga fuerza de ley.

En nuestra posición de senadores, y haciendo una lectura del contexto actual, es necesario adentrarse en la Reforma Laboral que ya se encuentra aprobada desde junio de 2025. Dicha reforma es un proyecto de ley que tiene relevancia para el contexto colombiano, ya que va acorde a la necesidad de modernizar las condiciones del trabajo e ir contra los altos niveles de informalidad y precariedad que caracterizan al mercado laboral del país. Tal y como comprueban las cifras del departamento administrativo nacional de estadística (2025), entre enero y marzo del 2025, aproximadamente el 57,2% de la población ocupada se encuentra bajo condiciones de informalidad, lo que implica que muchos interesados no disponen de un contrato de trabajo formal, ni acceso a la seguridad social. De igual modo, podemos actualizar el discurso de la OIT, insistiendo que el país debe cumplir con garantizar el acceso a empleos dignos, con igualdad de condiciones y la protección de derechos laborales, alineándose a los estándares internacionales de “trabajo decente y digno”.

Sin embargo, en los últimos años se ha generado un debate continuo entre empresas, gobierno y sindicatos. Por un lado, los empleadores han expresado su preocupación por el aumento de los costos laborales que podrían conllevar algunas de las medidas de reforma, como el aumento de las primas nocturnas y dominicales. Por otro lado, los sindicatos y los representantes de los trabajadores consideran urgentemente necesario equilibrar las relaciones laborales, fortalecer la estabilidad contractual y reconocer los derechos de quienes trabajan en condiciones precarias, como los trabajadores de plataformas digitales y los aprendices del SENA.

El proyecto de ley fue impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro y consagrado en la Ley 2466 de 2025.

Como es bien sabido, el debate previo a esta reforma nos plantea un dilema que ha estado presente en las discusiones políticas y económicas durante siglos: ¿Podemos garantizar una mayor justicia social sin sacrificar la productividad económica? O, por el contrario: ¿Es posible mantener altos niveles de productividad y competitividad global si, al mismo tiempo, no garantizamos a los trabajadores los derechos fundamentales ni condiciones de vida dignas?

Los senadores de la República tienen la responsabilidad de abordar este debate con dignidad, sin caer en falsos dualismos. No se trata de elegir entre trabajadores o empleadores, entre justicia o competitividad. El verdadero reto es crear un marco legal que equilibre ambas dimensiones. Una reforma del mercado laboral centrada únicamente en la rentabilidad empresarial corre el riesgo de perpetuar la desigualdad y la exclusión. Pero una reforma que ignora las necesidades de la productividad.

## **2.1 Justicia Social en el ámbito laboral**

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2025), la justicia social no es un eslogan abstracto ni un concepto vacío. En concreto, significa que todas las personas, independientemente de su situación económica, género, edad o lugar de nacimiento, tienen igualdad de oportunidades y trato en el acceso al empleo, y la garantía de que este se realizará en condiciones dignas, seguras y equitativas.

Cuando hablamos de trabajo, no podemos reducirlo a un mero factor de producción, como si fuera una variable más de las cuentas nacionales. El trabajo es, ante todo, un derecho fundamental consagrado en la Constitución colombiana (1991, artículo 25), que otorga identidad y sentido a las personas. A través del trabajo, los ciudadanos se integran a la vida social, construyen proyectos familiares, acceden a bienes y servicios básicos y participan activamente en la vida democrática. Como destaca Sen (2000), el trabajo no solo genera ingresos, sino que también amplía las libertades y las oportunidades de las personas para vivir la vida que desean.



La justicia social en el ámbito laboral también tiene una dimensión colectiva. No se trata únicamente de mejorar las condiciones de cada trabajador, sino de fortalecer la sostenibilidad de todo el sistema de protección social. Tal como lo señala la OIT (2019), la formalización del empleo amplía la base de aportantes, mejora la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y reduce las desigualdades en el acceso a salud y pensiones. En este sentido, un país donde más ciudadanos trabajan de manera formal y estable es un país con instituciones más sólidas y resilientes.

De igual forma, la justicia social en el trabajo es una herramienta esencial para enfrentar uno de los grandes males que históricamente ha marcado a Colombia: la desigualdad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2024), la alta informalidad laboral que afecta a más del 50 % de la población ocupada, contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza y limita la movilidad social. Avanzar hacia un modelo laboral que reconozca y proteja la dignidad del trabajador no debe verse como un lujo o un obstáculo económico; por el contrario, es una inversión en cohesión social, en estabilidad democrática y en desarrollo sostenible.

## **2.2 Productividad económica**

La productividad es un concepto central en cualquier discusión sobre desarrollo económico y laboral. Puede entenderse desde varias dimensiones, cada una de ellas con implicaciones distintas para la formulación de políticas públicas. En primer lugar, se encuentra la productividad laboral, que mide el producto interno bruto (PIB) generado por cada trabajador o por cada hora trabajada. Este indicador es fundamental para evaluar la eficiencia del trabajo humano y, en muchos casos, sirve como referencia para establecer comparaciones internacionales en materia de desempeño económico (Banco Mundial, 2023).

En segundo lugar, se analiza la productividad multifactorial o total de los factores (TFP, por sus siglas en inglés), que se refiere a la eficiencia en el uso combinado de los recursos de capital y trabajo. Este indicador mide aspectos como la innovación tecnológica, la calidad de la gestión empresarial, la infraestructura y el entorno institucional.

A diferencia de la productividad laboral, que se enfoca solo en el aporte del trabajador, la TFP permite comprender el aporte del sistema productivo en su conjunto (OECD, 2022).

Por último, está la competitividad, entendida como la capacidad de las empresas y del país para sostener su crecimiento económico en mercados globales. La competitividad no se limita a producir más, sino a hacerlo de manera eficiente, innovadora y sostenible. La literatura especializada advierte que la competitividad de un país está íntimamente ligada a su capacidad de generar valor agregado, de atraer inversión y de mejorar de manera constante la calidad del empleo (Porter, 1990).

En el caso de los colombianos. Los niveles de productividad son relativamente bajos frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo al que Colombia pertenece desde el año 2020. Según la OECD (2022), la brecha de productividad del país frente al promedio de los países miembros supera el 40 %. Esto no se explica únicamente por diferencias coyunturales, sino por problemas estructurales relacionados con el capital humano, la baja inversión en innovación y desarrollo, y las limitaciones en infraestructura física y tecnológica.

### ***3. Panorama Laboral y Social en Colombia***

El panorama laboral y económico en Colombia refleja una serie de desafíos estructurales que no pueden ser ignorados al momento de discutir la reforma laboral. La comprensión de estos fenómenos resulta crucial para contextualizar las implicaciones de cualquier modificación legislativa en la relación entre justicia social y productividad económica.

En Colombia, más de la mitad de la población empleada lo está en la informalidad, lo cual se traduce en ausencia de contrato, seguridad social y estabilidad, lo que impacta, por un lado, a los/as trabajadores/as y, por otro, a la financiación del sistema de protección social (PNUD, 2024). El desempleo estructural se encuentra entre el 10 % y el 12 % a causa de la falta de sincronía entre la formación laboral y las necesidades productivas, que requiere reformas en la formación en capacidades laborales e innovación (DANE, 2025).

La productividad laboral se estanca, los incrementos son inferiores al 1 % por año, lo que le resta competitividad internacional respecto de países mucho más avanzados en cuanto a digitalización e innovación (OCDE, 2022). Hay una fuerte segmentación del mercado laboral entre la parte formal, que presenta mejores condiciones, y la parte informal, donde la precariedad y la falta de protección social son la norma (Ocampo, 2021). Por último, persiste una importante desigualdad de género; mayores tasas de desempleo e informalidad para las mujeres, menores remuneraciones, el techo de cristal en términos de las posiciones de liderazgo, aspectos que se busca atender el Proyecto de Ley 166 de 2023 (Cámara de Representantes, 2023).

Se puede llegar a concluir que el panorama laboral y económico colombiano está marcado por problemas de informalidad, desempleo estructural, baja productividad, segmentación y desigualdad de género. La discusión en el Senado debe partir de este diagnóstico, reconociendo que, sin atender estas problemáticas estructurales, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en avances normativos sin efectos reales en la vida de los trabajadores y en la sostenibilidad económica del país.

#### **4. Implicaciones de la reforma laboral**

##### **4.1 Argumentos a favor (enfoque social)**

Los defensores de la reforma laboral destacan que su principal valor radica en fortalecer la justicia social dentro del mundo del trabajo. En un país caracterizado por altos niveles de desigualdad e informalidad, la ampliación de derechos no debe ser vista únicamente como un costo económico, sino como una inversión en cohesión social y desarrollo sostenible.

Formalización y seguridad social. Un segundo argumento se relaciona con la necesidad de reducir la informalidad y ampliar la cobertura de seguridad social. En Colombia, más de la mitad de los trabajadores están por fuera del sistema formal, lo que limita sus posibilidades de acceder a pensiones, salud y otros beneficios. La reforma, al limitar la tercerización excesiva y regular nuevas modalidades de empleo como las plataformas digitales, puede contribuir a que más personas se vinculen formalmente, ampliando así la base de cotizantes y reduciendo la evasión en la seguridad social.



Efecto positivo sobre la productividad futura. Otro aspecto central es que la protección laboral no necesariamente debe interpretarse como un obstáculo al crecimiento económico. Por el contrario, existe evidencia de que trabajadores con mayor estabilidad y acceso a derechos tienden a mostrar un mejor desempeño. Esto se traduce en mayor compromiso, menores tasas de rotación y disposición a participar en procesos de capacitación y actualización de competencias. La OIT (2025), enfatiza que un entorno laboral justo y seguro tiene impactos directos sobre el fortalecimiento del capital humano, lo que a su vez se convierte en un factor clave de competitividad en el mediano y largo plazo.

En el Senado de la República de Colombia, un evidente e incuestionable debate en torno a la reforma laboral ha dado lugar a divisiones en los partidos políticos y sus bancadas. A favor del proyecto se pueden citar, principalmente al Pacto Histórico principal promotor de la misma, así como el partido Comunes, que también se pronunció a favor; mientras que en partidos como la Alianza Verde y el Partido Liberal también hay apoyos en algunos de sus senadores que acompañaron la iniciativa, pero sin embargo no hay un total consenso en sus respectivas bancadas.

En sentido contrario, la reforma se ha enfrentado a una oposición absolutamente firme en la Comisión Séptima y en el Senado por parte de congresistas de diversas colectividades: entre quienes han votado en contra o han promovido propuestas negativas están Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blal y Esperanza Andrade (Partido Conservador), Berenice Bedoya (ASL), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA). Estos partidos, especialmente el Centro Democrático, el Conservador y sectores de partidos cristianos y de otras minorías han tenido posiciones firmemente contrarias a la reforma, defendiendo el claro argumento de los perjuicios que puede acarrear en torno a la contratación y a la estabilidad de las empresas.

## **4.2 Argumentos en contra (“centrados en el sector manufacturero”)**

Los opositores a la reforma laboral sostienen que una ampliación de derechos puede aumentar notablemente los costos de contratación y de permanencia de la mano de obra, sobre todo en micro y pequeñas empresas que cuentan con una escasa capacidad financiera, lo que aumenta los riesgos de la informalidad en un país donde más del 50 % de la mano de obra ya tiene esta condición. Para ellos, unas normas demasiado rígidas pueden desembocar a los empresarios y a los trabajadores en prácticas laborales informales, lo que debilitaría la cobertura de seguridad social y la precariedad. Además afirman que una menor flexibilidad en el mercado laboral y una máxima carga regulatoria puede disminuir la competitividad de Colombia frente a otros países de la región, lo que a su vez genera un desincentivo frente a la inversión extranjera directa, una reducción en la generación de empleo formal y en el crecimiento de la economía (David et al., 2020; Peña et al., 2015; OECD, 2022).

#### ***4.3. Posturas intermedias (enfoque de armonización)***

La reforma laboral en Colombia ha producido posiciones muy diversas: en primer lugar, sus defensores, el Gobierno colombiano, el Pacto Histórico, sectores sindicales y sociales, afirman que la misma busca dignificar la actividad laboral, reducir la precariedad, fomentar la formalización, cerrar brechas de género y fortalecer la protección social; en el lado contrario, los opositores, el Centro Democrático, el Partido Conservador y gremios empresariales, anticipan que el aumento de costos laborales puede desincentivar la contratación, empeorar la informalidad, disminuir la competitividad y la inversión extranjera; finalmente, existen los sectores intermedios, en su mayoría, las posturas de algunos miembros del Partido Liberal y de la Alianza Verde, quienes afirman la necesidad de aumentar derechos e implementan esta nueva regulación de forma gradual mediante subsidios de transición, programas de capacitación e innovación que permitan equilibrar la protección laboral y la sostenibilidad del aparato productivo.

Dentro de las propuestas que sirven para sostener este cambio laboral resalta la gradualización que permitiría la inclusión de los nuevos derechos de manera gradual, compensada de subsidios

las pequeñas empresas y, llegado el momento, reducir el riesgo de choques instantáneos en los empleos formales (Banco Mundial, 2020); la potenciación de los programas de productividad conducentes a incrementar el capital humano formando, innovando, digitalizando e incidiendo sobre los créditos de forma que crecieran, tal el planteo, los mayores costes laborales con un aumento a la competitividad (OECD, 2022); y la inclusión de evaluaciones continuas, que incorporarán indicadores de la informalidad, del empleo y de la productividad, que permitan ajustar la reforma pasados 18 o 24 meses, siguiendo las experiencias internacionales que han puesto de manifiesto la necesidad de una supervisión técnica y flexible que sustente la persistencia del cambio, tal como muestran Berg y Kucera (2008).





## ***TEMA 2: Reconfiguración de la política de drogas: regulación y despenalización.***

La historia de la política de drogas en Colombia debe comprenderse como un fenómeno multidimensional en el que convergen factores económicos, sociales, culturales y geopolíticos. Desde mediados del siglo XX, el país transitó de ser un espacio alejado en la producción de sustancias psicoactivas a convertirse en un actor central dentro de la economía global de la cocaína.

Este proceso estuvo marcado por etapas claramente diferenciadas: la bonanza marimbera, el auge de los carteles de Medellín y Cali, la posterior fragmentación criminal, y, más recientemente, la diversificación de economías ilícitas. Cada una de estas fases dejó huellas profundas en la institucionalidad, en la configuración del conflicto armado, en la vida de comunidades rurales y urbanas, y en la orientación de las políticas antidrogas diseñadas por el Estado.

El narcotráfico en Colombia ha mostrado que existen, al menos, dos posturas opuestas para enfrentar este problema. La primera se ha basado en una respuesta represiva y militar, con acciones como la “Operación Fulminante” o las fumigaciones aéreas dentro del Plan Colombia. Aunque estas medidas buscaban reducir los cultivos ilícitos, también trajeron consecuencias negativas para las comunidades rurales, afectando la salud de las personas y causando daños al medio ambiente. Por otro lado, la segunda postura ha estado ligada a la cooperación internacional, especialmente con países como Estados Unidos, donde muchas veces han primado intereses políticos y estratégicos externos. Esta relación, junto con la penetración del narcotráfico en instituciones públicas, dio origen a lo que se conoce como “narcopolítica”, debilitando la confianza en la democracia colombiana.

Con el paso de los años, el narcotráfico ha cambiado, primero estuvo centrado en la marihuana durante la bonanza marimbera, después en el auge de la cocaína con los grandes carteles, y hoy en redes criminales más fragmentadas que diversifican sus negocios ilegales. A pesar de los diversos esfuerzos por parte del Estado,

la producción de cocaína en Colombia continúa en aumento. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2024), en 2023 el país produjo alrededor de 2.600 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 53 % frente al año anterior.

Este crecimiento se concentró principalmente en el suroeste del país, en zonas bajo control de disidencias de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz y que hoy dominan gran parte del negocio. El informe también destacó que los decomisos globales de cocaína alcanzaron un récord histórico de 2.275 toneladas en 2023, reflejando tanto el aumento del tráfico como un mayor esfuerzo de oposición. Además, el número de consumidores también se incrementó, llegando a los 25 millones de personas en el mundo, frente a los 17 millones registrados hace una década.

Estos datos evidencian que el narcotráfico sigue siendo un fenómeno en expansión, con una producción en aumento, un mercado internacional cada vez más amplio y un impacto directo en la seguridad, la salud pública y la estabilidad institucional. Lo anterior demuestra la necesidad de replantear las políticas antidrogas hacia enfoques más integrales que combinen control, prevención y alternativas sostenibles para las comunidades involucradas.

Es importante conocer los antecedentes de esta discusión. La política de drogas en Colombia ha tenido una trayectoria marcada por diferentes decisiones históricas que han cambiado la forma en que entendemos el consumo y el control de estas sustancias. Uno de los hitos más relevantes ocurrió en el año 1994, cuando la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-221, decidió que el consumo personal de dosis mínimas no debía ser castigado penalmente.

Esta decisión se convirtió en un punto de referencia debido a que puso en el centro valores como la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad individual, y abrió el camino para tratar el consumo más como un asunto de salud pública que como un delito.

Desde entonces, portar pequeñas cantidades de marihuana, cocaína u otras drogas no implica sanciones penales, aunque el tema ha generado constantes debates y tensiones, con algunos intentos de restringirlo mediante sanciones administrativas en ciertos espacios.

Al mismo tiempo, la Ley 30 de 1986, conocida como Estatuto Nacional de Estupefacientes (ENE) se ha mantenido como la norma base para el control de drogas. Sin embargo, su enfoque represivo ha quedado aplazado frente a los nuevos desafíos y enfoques de derechos humanos y salud pública, lo que ha impulsado intentos de reforma desde 2012.

Entre 2015 y 2016, Colombia reguló el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, convirtiéndose en uno de los primeros países de la región en hacerlo. Esta decisión no solo abrió oportunidades en el ámbito de la salud y la investigación, sino que también ayudó a ampliar el debate sobre la regulación y la despenalización en general.

### ***Posturas en el debate***

La reconfiguración de la política de drogas en Colombia, enfocada en la regulación y despenalización, presenta distintas posturas políticas reflejadas en el Senado. La despenalización implica eliminar las sanciones penales al consumo personal de drogas con el objetivo de disminuir la criminalización de los consumidores y mitigar los impactos sociales negativos asociados a esto, promoviendo una visión del consumo como un asunto de salud pública más que de justicia penal. Por otra parte, la regulación supone un control por parte del Estado integral que abarca todo el proceso desde el cultivo hasta el consumo, mediante la implementación de licencias, impuestos y normativas claras que buscan reducir la ilegalidad del mercado y promover el bienestar colectivo (Comisión Global de Políticas de Drogas, 2020).

En este sentido, algunos sectores abogan por la regulación legal del mercado de estas sustancias psicoactivas, como el cannabis, para fines medicinales y terapéuticos, bajo un marco estatal que garantice seguridad y control.



Esta perspectiva sostiene que la regulación permitiría un manejo mucho más seguro y responsable del consumo, además de abrir oportunidades para la investigación científica y la producción controlada (Calderón Vallejo, 2017).

Por otro lado, existen posturas más conservadoras que mantienen la criminalización como mecanismo para controlar el consumo y porte de drogas, argumentando que la regulación podría fomentar el aumento del consumo y problemas asociados de salud pública y seguridad. Este enfoque enfatiza la necesidad de seguir reforzando políticas de prevención y control para evitar mayores riesgos sociales y desintegración familiar (Procuraduría General de Colombia, 2012).

En el Senado colombiano, el debate se centra también en si es necesario reformar la Constitución para permitir una regulación más amplia de las drogas, o si es posible avanzar en despenalizaciones parciales dentro del marco legal actual. Mientras algunos proponen una reforma que incluya la creación de clubes sociales cannábicos, con licencia para producción y consumo personalizado, otros defienden que la actual legislación ya permite ciertos niveles de despenalización, por ejemplo en la dosis personal (Corte Constitucional de Justicia, 2024).

Es importante destacar que el gobierno de Colombia ha avanzado con medidas como la aprobación del uso medicinal del cannabis en 2016 y la implementación de protocolos de manejo por parte del Ministerio de Salud, lo cual refleja una postura oficial hacia la regulación controlada. Sin embargo, esta política convive con la presión de sectores que buscan mantener o incluso recrudecer las sanciones contra el consumo y la producción ilícita, observándose un panorama político dividido y con posturas que deben ser consideradas en el marco del debate legislativo en el Senado (Calderón Vallejo, 2017).

### ***El papel del Senado en la política de drogas***

El Senado de la República, a la fecha actual, muestra un escenario de progresos acompañados por un claro nivel de polarización política en torno al tema de la política de drogas.

Recientemente, la Plenaria del Senado aprobó una proposición para declarar al "cartel de los soles" como una organización criminal transnacional y terrorista, en un debate que evidenció división entre sectores aliados y opositores al Gobierno Nacional. Aunque todos están de acuerdo en que el narcotráfico es una amenaza internacional, en el Congreso sigue habiendo diferencias sobre cómo enfrentarlo y sobre cómo nombrar a los actores involucrados, lo que genera tensiones en el debate político (Senado de la República, 2025).

En cuanto a la regulación y despenalización, el Senado ha discutido repetidamente en estos años la iniciativa de regular el cannabis para uso adulto, pero el avance ha sido bastante lento y complejo debido a prejuicios y diferencias políticas, a pesar de un creciente apoyo en opinión pública. Los proyectos que buscan modificar la Constitución para permitir una regulación responsable incluyen límites claros para proteger a menores y espacios sensibles, buscando un equilibrio entre derechos individuales y deberes estatales de prevención, aunque enfrentan resistencia en el legislativo (Razón Pública, 2025).

Por otro lado, el Senado también sostiene la necesidad de fortalecer la política de combate al narcotráfico con medidas de control y coordinación internacional, donde la desaceleración del conflicto armado y la búsqueda de soluciones integrales influyen en el panorama. Es importante mencionar, que las diferentes visiones políticas mantienen la discusión polarizada, con sectores que insisten en la vía represiva y otros que promueven enfoques de salud pública y reducción de daños (Ministerio de Justicia, 2023).

Los diferentes partidos en el Senado colombiano influyen decisivamente en la reconfiguración de la política de drogas, especialmente en temas de regulación y despenalización. El Pacto Histórico, con su enfoque progresista y social, tiende a favorecer avances hacia una regulación más humanitaria y la despenalización gradual, promoviendo un tratamiento menos punitivo y más orientado a la salud pública y los derechos humanos.

Por otro lado, partidos tradicionales como el Centro Democrático y el Partido Conservador mantienen posturas más conservadoras y restrictivas, resistiendo cambios hacia la despenalización y privilegiando un enfoque de control estricto y represión. El Partido Liberal y Cambio Radical, con posiciones más moderadas, pueden actuar como puentes o contrapesos en estos debates, dependiendo de las coyunturas políticas y presiones sociales, lo cual genera un escenario parlamentario complejo donde la reforma depende de negociaciones y consensos limitados.

El Senado refleja un avance significativo en la agenda de política de drogas, tanto en términos de visibilización de amenazas transnacionales como en propuestas de regulación, pero la polarización política y el lento ritmo legislativo impiden la concreción rápida de reformas estructurales, lo que obliga a mantener un diálogo abierto y equilibrado para afrontar el desafío del narcotráfico y el consumo en Colombia.



# QARMAS

## ***TEMA 1:***

- ¿Qué cambios de la reforma laboral podrían mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia?
- ¿Cómo puede la reforma laboral ayudar a reducir la informalidad en el empleo?
- ¿Qué tensiones pueden surgir entre las empresas y los sindicatos frente a la reforma laboral?

## ***TEMA 2:***

- ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de regular el consumo de drogas en Colombia?
- ¿De qué manera la despenalización podría impactar a los jóvenes y a las comunidades rurales?
- ¿Cómo podría la regulación del mercado de drogas contribuir a reducir la violencia y el narcotráfico en Colombia?

## ***Bibliografía recomendada***

Fernández, M. C. (2025, 17 de septiembre). Tras intenso debate, Senado aprobó proposición que declara al 'cartel de los soles' como organización terrorista. Senado de la República de Colombia. <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/6841-tras-intenso-debate-senado-aprobo-proposicion-que-declara-al-cartel-de-los-soles-como-organizacion-terrorista>

Llanos, L. (2025, 18 de junio). Senado aprueba reforma laboral. Senado de la República de Colombia. <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/6565-senado-aprueba-reforma-laboral>

Senado de la República de Colombia. (s. f.). Inicio. <https://www.senado.gov.co>

Global Commission on Drug Policy. (s. f.). Home. <https://globalcommissionondrugs.org>

Rueda, A. M. (2024, 19 de noviembre). Un año de la nueva política de drogas del gobierno Petro. ¿En qué van los cambios? Fundación Ideas para la Paz (FIP). <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2024-11/un-ano-de-la-nueva-politica-de-drogas-del-gobierno-petro-en-que-van-los-cambios#:~:text=La%20Política%20Nacional%20de%20Drogas,riesgo%20de%20quedarse%20en%20intenciones>

# REFERENCIAS

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI. (2023). Análisis del impacto de la reforma laboral en Colombia. <https://www.andi.com.co>

Banco de la República. (2020). Efectos de la flexibilización laboral en el mercado colombiano. <https://www.banrep.gov.co>

Banco de la República. (2023). Informe de política monetaria. <https://www.banrep.gov.co>

Banco Mundial. (2023). World Development Report 2023: Jobs and Poverty. <https://www.worldbank.org>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (2021). La reforma laboral en Brasil y sus efectos. <https://www.cepal.org>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (2022). Informalidad laboral y desarrollo en América Latina. <https://www.cepal.org>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). Mercado laboral en Colombia: informe trimestral. <https://www.dane.gov.co>

Fondo Monetario Internacional – FMI. (2022). Closing Gender Gaps in Emerging Markets. <https://www.imf.org>

Ministerio del Trabajo. (2023). Informe sobre el estado del sindicalismo en Colombia. <https://www.mintrabajo.gov.c>

Organización Internacional del Trabajo – OIT. (2021). Misión de Empleo: informe sobre Colombia. <https://www.ilo.org>

Organización Internacional del Trabajo – OIT. (2022). Trabajo decente y productividad: experiencias comparadas. <https://www.ilo.org>



Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE. (2023). Estudio económico de Colombia. <https://www.oecd.org>.

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI. (2023). Análisis de impacto de la reforma laboral en Colombia. <https://www.andi.com.co>

Banco de la República. (2023). Informe de política monetaria. <https://www.banrep.gov.co>

Consejo Privado de Competitividad. (2023). Informe Nacional de Competitividad 2023–2024. <https://compite.com.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). Mercado laboral en Colombia: informe trimestral. <https://www.dane.gov.co>

Ministerio del Trabajo. (2023). Informe sobre el estado del sindicalismo en Colombia. <https://www.mintrabajo.gov.co>

Organización Internacional del Trabajo – OIT. (2022). Trabajo decente y productividad: experiencias comparadas. <https://www.ilo.org>.

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI. (2023). Análisis de impacto de la reforma laboral en Colombia. <https://www.andi.com.co>

Consejo Privado de Competitividad. (2023). Informe Nacional de Competitividad 2023–2024. <https://compite.com.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). Mercado laboral en Colombia: informe trimestral. <https://www.dane.gov.co>

Ministerio del Trabajo. (2023). Informe sobre el estado del sindicalismo en Colombia. <https://www.mintrabajo.gov.co>

Instituto Kroc. (2022). Cuarto informe sobre implementación del Acuerdo de Paz. <https://kroc.nd.edu>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Informe nacional sobre atención al consumo de drogas. <https://www.minsalud.gov.co>

Comisión Global de Políticas de Drogas. (2020). Informe anual. <https://www.globalcommissionondrugs.org>

Ministerio de Justicia de Colombia. (2023). Política nacional de drogas 2023–2033. <https://www.minjusticia.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2025, mayo 13) <https://caracol.com.co/2025/05/13/mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-en-colombia-trabaja-de-manera-informal-segun-el-dane>

Organización TNI. (2014). Reforma de la ley de drogas en Colombia: guía básica. Transnational Institute. <https://www.tni.org/es/publicaci%C3%B3n/reforma-de-la-ley-de-drogas-en-colombia-guia-basica>

Ideas Paz. (2024, noviembre 18). Un año de la nueva política de drogas del gobierno Petro: ¿en qué van los cambios?. <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2024-11/un-ano-de-la-nueva-politica-de-drogas-del-gobierno-petro-en-que-van-los-cambios>

El País. (2025, abril 5). Mover una montaña, o el difícil camino de cambiar la política de drogas. <https://elpais.com/america-colombia/2025-04-05/mover-una-montana-o-el-dificil-camino-de-cambiar-la-politica-de-drogas.html>

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI. (2023). Análisis del impacto de la reforma laboral en Colombia. <https://www.andi.com.co>

Banco de la República. (2020). Efectos de la flexibilización laboral en el mercado colombiano. <https://www.banrep.gov.co>

Banco de la República. (2023). Informe de política monetaria. <https://www.banrep.gov.co>

Banco Mundial. (2023). World Development Report 2023: Jobs and Poverty. <https://www.worldbank.org>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (2021). La reforma laboral en Brasil y sus efectos. <https://www.cepal.org>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (2022). Informalidad laboral y desarrollo en América Latina. <https://www.cepal.org>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). Mercado laboral en Colombia: informe trimestral. <https://www.dane.gov.co>

Fondo Monetario Internacional – FMI. (2022). Closing Gender Gaps in Emerging Markets. <https://www.imf.org>

Ministerio del Trabajo. (2023). Informe sobre el estado del sindicalismo en Colombia. <https://www.mintrabajo.gov.c>

Organización Internacional del Trabajo – OIT. (2021). Misión de Empleo: informe sobre Colombia. <https://www.ilo.org>

Organización Internacional del Trabajo – OIT. (2022). Trabajo decente y productividad: experiencias comparadas. <https://www.ilo.org>





# GUIÁ ACADÉMICA (SENADO) 2025 MONUC 2025

Diseño: Laura Barragán-Sebastián Valencia

Redacción: Sofía Moreno-Mariana Garzón-

Valeria Ardila

MONUC recomienda evitar la impresión de este documento para contribuir a la disminución del uso de recursos naturales y la contaminación atmosférica.



**MONUC**  
Modelo de Naciones Unidas de la  
Universidad Católica de Pereira



Monucejeucp@gmail.com



3014277079



@monuc\_eje